

Presidencia del señor PAZ

Senadores presentes: Alsina, Bárcena, Borges, Bustamante, Correa, Daract, Dávila, Elías, Ferré, Fraguero, Frías, Gallo, Gómez, Laspiur, Lucero, Madariaga, Moreno, Navarro, Piñero, Posse, Uriburu, Vega y Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Cullen, González y Victorica.

SUMARIO

- 1.—Despachos de Comisión.
- 2.—Concesión de licencias a los senadores por Tucumán señor Posse y por Jujuy señor Bustamante para ausentarse temporalmente de la Capital.
- 3.—Indicación del señor Navarro para tratar en la presente sesión las reformas introducidas por la Cámara de Diputados, a los proyectos de ley del Senado, sobre justicia federal.
- 4.—Aprobación del proyecto de ley que reconoce como deuda nacional la liquidación practicada por la provincia de Buenos Aires de los reclamos de extranjeros.
- 5.—Aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a los proyectos de ley del Senado sobre justicia federal números 1, 2 y 3.
- 6.—Resolución para que se pongan de acuerdo los presidentes de ambas Cámaras, a objeto que las de Senadores pueda celebrar sesiones diarias.
- 7.—Fijación de orden del día para la sesión próxima.

—En Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de Agosto del año del Señor de mil ochocientos sesenta y tres, reunidos en su sala de sesiones, el señor presidente y señores senadores arriba anotados, con inasistencia del señor González, por indisposición, y de los señores Cullen y Victorica, con aviso: se abrió la sesión y se leyó y aprobó el acta de la anterior salvándose una ligera observación hecha en ella por el señor de la Vega.

1

Dióse cuenta a continuación de los asuntos entrados, que lo eran dos despachos de la Comisión de Hacienda sobre el contrato de colonización celebrado con la Sociedad de Inmigración de Gales, y sobre la solicitud hecha por el gobierno de Entre Ríos por el establecimiento en aquella provincia de un banco particular, con facultad de emitir billetes. De la Comisión de Negocios Constitucionales sobre la reclamación del ciudadano norteamericano señor White, y de la de Peticiones sobre la licencia para ausentarse temporalmente de esta Capital, solicitada por los señores Posse y Bustamante.

2

Sr. Elías. — Antes de entrar a la orden del día, yo pediría al Honorable Senado que se ocupase de las dos licencias que han solicitado los señores senadores por Tucumán y Jujuy, porque es de práctica hacerlo así.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se votará si se consideran sobre tablas o no, las licencias que han solicitado los señores senadores.

—Se votó y resultó afirmativa general. En seguida se votó en general el dictamen de la Comisión y fué aprobado por afirmativa general.

Sr. Elías. — Diré cuatro palabras en apoyo del dictamen de la Comisión. Respecto de la solicitud del señor senador por Jujuy, la Comisión no ha trepidado en aconsejar que se le conceda la licencia en virtud de la notoriedad de su enfermedad. Según las explicaciones que el señor senador ha dado en el seno de la Comisión, le es indispensable ausentarse para el restablecimiento de su salud.

Respecto del señor senador por Tucumán, militan iguales razones, no precisamente porque su salud se halle en mal estado, sino porque tiene que atender a necesidades muy urgentes y es por eso que la Comisión aconseja que se concedan las dos licencias.

Sr. Presidente. — Se votará primeramente una solicitud y después la otra.

Sr. Madariaga. — Yo creo que deben votarse las dos juntas.

Sr. Presidente. — No hay inconveniente.

—Se votó si se concedían o no las dos licencias y resultó afirmativa general.

3

Sr. Navarro. — También haré moción para que si después que la orden del día sea despachada, queda tiempo, se consideren en esta misma sesión las reformas que ha introducido la Cámara de Diputados en el proyecto sobre la justicia federal, a fin de que quede cuanto antes despachado.

—Apoyado.

Sr. Alsina. — Eso se votará después, si queda tiempo.

4

Se pasó a la orden del día con la lectura del siguiente dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales.

Honorable señor:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha examinado el proyecto y mensaje del Ejecutivo, solicitando autorización para pagar la deuda sobre reclamaciones de extranjeros, en esta provincia, anterior a la época de la caída de Rosas, y tiene el honor de aconsejaros prestéis vuestra sanción a dicho proyecto, por las razones que expondrá el miembro informante de la Comisión.

Sala de comisiones, Agosto 18 de 1862.

José Posse. — S. M. Laspiur.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se reconoce como deuda nacional la liquidación practicada por la provincia de Buenos Aires, de los reclamos de súbditos extranjeros, importando la suma de seis millones novecientos setenta y un mil ciento tres pesos seis reales moneda corriente.

Art. 2º — Esta suma será pagada en fondos públicos de la Nación de renta del seis por ciento anual al cambio corriente del papel moneda.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1863.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, acompañando el adjunto proyecto de ley sobre reconocimiento y pago de los reclamos extranjeros liquidados, y aprobados por la provincia de Buenos Aires.

Esta deuda procede de reclamos de súbditos extranjeros del tiempo anterior a la caída de Rosas, porque todos los posteriores a esta época han sido arreglados y pagados por la provincia de Buenos Aires. Reclamos iguales fueron reconocidos como deuda nacional por el gobierno de la Confederación, hasta una suma que pasa de dos millones de pesos fuertes y se están pagando por el gobierno nacional. Por iguales razones, la deuda proveniente del arreglo de las reclamaciones extranjeras por perjuicios causados a súbditos extranjeros, en la provincia de Buenos Aires, debe también considerarse a la par de los de las otras provincias como deuda nacional.

Los créditos reconocidos por el gobierno de Buenos Aires, son en papel moneda, pagaderos en fondos públicos de renta del seis por ciento. En el proyecto que el gobierno presentó al Congreso nacional, el pago debe hacerse en fondos de moneda metálica de igual renta de seis por ciento, pues que la Nación no puede emitir sus fondos públicos, en la moneda corriente de Buenos Aires.

Dios guarde al Honorable Congreso nacional muchos años.

Dalmacio Vélez Sársfield.

Sr. Posse. — Señor presidente: la deuda de que va a ocuparse el Senado, no debe causar alarma en los espíritus, por lo que ya se ha con-

principios salvadores tienen resistencia, porque se han cometido abusos. Pero nosotros, hombres de Estado, que debemos ver las cosas con sangre fría, no debemos tomar los abusos como pretexto y por el contrario debemos corregirlos. Cuando un agente extranjero quiera tomar intervención en cosas que no le pertenezcan, rechacémosle, pero cuando venga a solicitar lo que es justo debemos escucharle y hacer lugar a su pedido, y eso considerado, no sólo por el lado de la justicia sino por el de la conveniencia también.

Cuando hoy se levante cualquier caudillo por ahí, ya sabe a qué atenerse, ya sabe las consecuencias que le han de sobrevenir, esto es lo que debemos sostener, y el principio de reconocer los daños y perjuicios de los extranjeros en tiempo de desórden, no nos lleva de cierto, a las consecuencias a que nos quieren llevar. En lugar de no pagar a nadie paguemos a todos, empecemos por pagar lo más urgente y más tarde aplicaremos a los hijos del país los mismos principios que a los extranjeros. Yo creo que no se puede sostener absolutamente la idea de que debemos autorizar el abuso para todos en lugar de establecer el orden para extranjeros y nacionales.

Sr. Madariaga. — Puesto que estamos en discusión libre, yo por mi parte deseo consignar algunas doctrinas.

Yo cuando hice la pregunta anterior fué con el objeto de decir que esa deuda proviene de armas vendidas a Rosas, y yo no sé que en las guerras civiles la parte vencida tenga derecho de reclamar; yo no sé en derecho público qué hay sobre esto.

Sr. Frías. — En derecho no son vencidos ni vencedores.

Sr. Madariaga. — Yo tengo una duda a este respecto.

Así, los que proporcionaron armas a Rosas no sé si por el derecho público tienen derecho a que se les pague, yo presento esta duda...

Sr. Posse. — Pero eso es lícito comercio.

Sr. Madariaga. — Vender armas a Rosas, para combatirnos, era protegerle.

Yo he de votar en contra del proyecto porque ya he dicho que todos debemos ser iguales.

Sr. Elías. — No sé si he oído mal. Me parece que el señor ministro al hablar sobre los perjuicios que había ocasionado la dictadura a los extranjeros, dijo al concluir que la consecuencia que tuvo esa tiranía es que cayera en tierra a impulso de los extranjeros. No quiero que el señor ministro repita ese error.

Ese honor pertenece en su mayor parte a argentinos; pertenece a la heroica provincia

de Corrientes, a la de Entre Ríos, y a la de Santa Fe.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores. — Me ha entendido mal el señor senador. No he dicho eso; he dicho que fué el origen que dió en tierra con esa tiranía, porque vinieron las intervenciones.

Sr. Elías. — Celebro mucho que sea así: no continuaré.

—Aprobado el proyecto en general por afirmativa de 21 votos contra 2, lo fué igualmente en particular.

5

—Se pasó a cuarto intermedio después del cual se leyó el siguiente dictamen de la Comisión de Legislación.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1863.

Honorable señor:

Vuestra Comisión de Legislación ha tomado en consideración las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en los proyectos números 1, 2 y 3 de la ley de justicia federal, sancionada por esta Honorable Cámara, y aunque tal vez pudiera hacer sobre ellas algunas observaciones, sin embargo, siguiendo el espíritu que guió a vuestra honorabilidad en la sanción de esa ley, que fué la de llenar cuanto antes una gran necesidad pública, y evitar mayores retardos, tiene el honor de aconsejaros su adopción por esa y demás razones que expondrá verbalmente el miembro informante de ella.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Angel Navarro. — Pedro Uriburu. — Benjamín Victorica.

El presidente de la
Cámara de Diputados
de la Nación

Buenos Aires, Agosto 7 de 1863.

Al señor presidente del Senado.

Tengo el honor de poner en conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores, que la de Diputados en sesión del 5 del corriente ha sancionado el proyecto que le fué remitido para su revisión bajo el número 1, — que trata de la jurisdicción y competencia de los tribunales

nacionales — con la supresión de las siguientes palabras en el inciso 6º del artículo 2º «actora, solicitando la ejecución de una ley o reglamento nacional», como aparece del proyecto adjunto.

Dios guarde al señor presidente.

JOSÉ E. URIBURU.
Bernabé Quintana,
Secretario.

El presidente de la
Cámara de Diputados
de la Nación

Buenos Aires, Agosto 13 de 1863.

Al señor presidente del Senado.

Tengo el honor de someter a nueva revisión de la Cámara de Senadores, los proyectos que sobre la justicia nacional envió esa Cámara al examen de la que presido, con los números 2 y 3, y que han sufrido las alteraciones que a continuación se expresa.

En el proyecto número 2, inciso 3º del artículo 3º, se han suprimido las palabras «con inhabilitación perpetua para cargos públicos», reduciéndose el inciso a lo siguiente:

«En los de la tercera, de uno a dos años.»

El artículo 5º del título 2º del mismo proyecto, ha sido sustituido por el que se transcribe:

«Artículo 5º — Todo el que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos de la Corte Pontificia, de aquellos que, para su ejecución, necesitan del pase del gobierno, sin haberlo obtenido, quedará sujeto a la «pena» de uno a cuatro años de extrañamiento; y todo aquel que lo ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haberle sido negado ese pase, quedará sujeto a la de cuatro a ocho años de extrañamiento.»

En el título 7º, el artículo 41 ha quedado sancionado en esta forma:

«Artículo 41. — Los que se introdujeran por fuerza en una cárcel pública y obligasen al alcaide o encargado de ella a que deje fugar los presos, serán castigados con trabajos forzados por 3 a 6 años; si tiene efecto la fuga serán castigados con la pena de trabajos forzados por 6 a 10 años.»

Al final de este título se han aceptado los tres artículos que se transcriben en subrogación de los propuestos por esa Cámara.

Artículo 5º — El que no siendo autoridad competente librase una orden de prisión o arresto, o aun siéndolo, omitiese expedirla por escrito, será castigado con la pena de prisión

de seis a dieciocho meses, o con una multa de trescientos a ochocientos pesos fuertes, o con una y otra juntamente.

Artículo 46. — El que ejecute una prisión o arresto sin orden escrita de su superior incurrirá en la pena de prisión de uno a seis meses, o de una multa de cincuenta a trescientos pesos.

Artículo 47. — Lo dispuesto en los dos artículos precedentes, no tendrá aplicación en los casos de delito in fraganti.

El título de la conspiración que venía en el proyecto del Senado, ha sido suprimido por unanimidad.

Se ha introducido como inciso del artículo 61 en el título diez «De las falsedades», el siguiente:

«Si la moneda cercenada se hubiese recibido en pago, de buena fe, y se expendiere con conocimiento de su cercenamiento, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.»

El artículo 6º del proyecto número 3 ha sido reformado en cuanto al radio que se fija para constituir domicilio legal los litigantes.

Por él se determinaba el de seis cuadras y la Cámara de Diputados lo ha extendido a diez.

Se ha introducido en el título 2º como artículo 23 el siguiente:

Artículo 23. — Toda vez que fuesen recusados o resultasen impedidos todos o la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, se integrará el tribunal insaculando a la suerte el número de conjuces que se necesite de una lista de veinticinco abogados que la misma Corte formará el 1º de Enero de cada año.»

Estas son, señor presidente, las reformas que han sufrido los proyectos que se devuelven.

Acompañan a esta nota los antecedentes necesarios con que el Senado remitió estos proyectos.

Dios guarde al señor presidente muchos años.

JOSÉ E. URIBURU.
Bernabé Quintana,
Secretario.

Las modificaciones hechas por el Senado en los proyectos de ley primitivos del Poder Ejecutivo sobre justicia federal, son las siguientes que se intercalan aquí para recuerdo del lector:

Número 1. — Que trata de la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.

Al inciso 1º del artículo 1º esta adición: *y de las civiles que versen entre una provincia y*

algún vecino o vecinos de otras, o ciudadanos o súbditos extranjeros, quedando el inciso en estos términos:

- 1º De las causas que versen entre dos o más provincias, y de las civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros.

Al artículo 2º

La supresión del inciso 2º, que dice: *Las civiles que versen entre alguna provincia y algún vecino o vecinos de otras, o ciudadanos, o súbditos extranjeros.*

La consiguiente alteración en el orden numérico de los incisos.

Número 2. — Que define los crímenes cuyo juzgamiento compete a dichos tribunales, y establece su penalidad.

Al artículo 1º del título 1º

La supresión del inciso 1º que dice: *Provocando a una potencia extranjera a declarar la guerra a la Argentina.*

En el inciso 2º (que queda de 1º) la substitución de la palabra *ésta* por la de *Nación Argentina*; quedando el inciso en esta forma:

- 1º *Tomando las armas contra la Nación Argentina bajo las banderas enemigas.*

La consiguiente alteración del orden numérico de los incisos, e igual alteración en la referencia que hace el inciso 5º (antes 6º), siendo dicha referencia a los incisos 2º y 3º y en lugar de 3º y 4º.

Al artículo 5º del título 2º

Substituído por el siguiente:

«Artículo 5º — Todo el que ejecutare o mandare ejecutar cualquier rescripto expedido por la Corte Pontificia, de aquellos que necesitan para su ejecución del pase del gobierno, sin haberlo presentado a éste, quedará sujeto a la pena de prisión de uno a tres años, o a una multa de trescientos a mil pesos fuertes, y todo aquel que lo ejecutase o mandase ejecutar, a pesar de haberle sido negado ese pase, quedará sujeto a la pena de un año a tres de prisión y de trescientos a mil pesos fuertes de multa a la vez.»

El siguiente título después del que trata «De la sedición» entrando bajo el número 6.

TITULO VI

De la conspiración

Art. 30. — Se incurre en delito de conspiración, reuniéndose y combinándose clandestinamente cualquier número de personas, concertando planes y medidas y efectuando o tratando de efectuar la adquisición de hombres, dinero, armas y cualquier objeto bélico con la mira de hacer estallar ulteriormente alguna rebelión o sedición.

Art. 31. — Los autores o promotores principales de alguna conspiración, sufrirán la pena de uno a cinco años de extrañamiento; y los demás complicados en ella, una pena discrecional, según fuesen las circunstancias del caso; las armas, dinero y todo objeto que se hubiese acoopiado, pertenecerá al Estado.

Art. 32. — Se incurre también en delito de conspiración, negociando o provocando oculta-mente a una potencia extranjera a declarar la guerra a la Argentina. Quien lo cometiese, será condenado a extrañamiento por cinco a diez años.

La alteración consiguiente, en la numeración de los títulos y artículos subsiguientes:

Artículo 8º (antes 7º)

Que trata de la resistencia a la autoridad y soltura de los presos.

Al final, la consignación de los artículos siguientes:

Artículo 48. — El que expida orden de prisión o arresto sin cumplir los requisitos que prescribe el artículo 18 de la Constitución, será castigado con la pena de prisión de seis a dieciocho meses, o con una multa de trescientos a quinientos pesos fuertes, o con una y otra juntamente.

Art. 49. — El que ejecute una prisión o arresto sin orden escrita de su superior, incurrirá en la pena de prisión de uno a seis meses, o de una multa equivalente.

La consiguiente alteración en el orden numérico de los artículos, hasta el fin del proyecto; así como en la referencia que hace el artículo 85 (antes 80) al 77, debiendo ser al 82.

PROYECTO NÚM. 3

Al artículo 68 del título 9, que trata de la citación o emplazamiento.

La supresión en el 2º miembro de dicho artículo de las palabras *por el juez seccional*, des-

pués de las de *serán firmadas*; e igualmente la supresión de las palabras finales *en su caso*; después de las de *Suprema Corte*; quedando así:

«Estos oficios serán firmados por el presidente de la Suprema Corte.»

Sr. Navarro. — Las razones que ha tenido la Comisión, señor presidente, para aconsejar al Senado la adopción de estas reformas, sin insistir en su primera sanción, son, primera y principal, que las más de esas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, se han votado unas por unanimidad y otras por una gran mayoría; de manera que si el Senado insistiese por alguna razón en su primera sanción habría poco fundamento para esperar que su insistencia fuese adoptada por la Cámara de Diputados. De donde resultaría que sólo se perdería tiempo, cuando es preciso terminar este asunto cuanto antes sea posible. Eso sucede con respecto a la primera de las reformas, a la palabra *actora*: fuera de que en ese punto la materia es bastante controvertible; y a mi juicio particular, no hay razón para que la Nación no pueda ser demandada, es decir, su fisco; porque propiamente a esto es a lo que vienen a parar las demandas contra la Nación, pues que relativamente a propiedades territoriales, no son materia de demandas judiciales sino de negociaciones diplomáticas, como en el contrato del ferrocarril en que la Nación se ha sometido a un arbitramiento, y desde entonces puede ser demandada ante los árbitros. Además, es un principio admitido en toda jurisprudencia que todo demandante puede venir a ser demandado por reconvencción o contra demanda y no puede excusarse de responder ante el mismo juez. Es un principio de eterna justicia. Así es que, aunque pudiese ser repugnante esta admisión de la Nación como demandada, sin embargo, he dicho que esa reforma tiene que aceptarse, porque nada adelantariamos con que insistiese el Senado, porque la Cámara de Diputados la ha adoptado por unanimidad. Casi otro tanto sucede con las demás.

En cuanto a la otra reforma que se refiere a las bulas o rescriptos de la corte romana, etcétera, ha parecido a la Comisión bastante razonable, porque cree que es menos chocante, o al menos más conforme en la práctica de otras naciones, que un prelado eclesiástico sea más bien extraño del país, que no que vaya a una cárcel; porque él puede ser motivo de disturbios interiores y agitación de las conciencias, mientras que saliendo del país tal vez se aquietan los ánimos; y es una pena que, por otra parte, no deja de ser grande y puede aplicarse con la

extensión o limitación, que corresponda a la gravedad del caso.

En cuanto a la otra reforma que se refiere al delito de forzar al alcaide a dar fuga a los presos, la sanción del Senado había dejado un vacío, que la Cámara de Diputados ha creído justo llenar.

La sanción del Senado sólo prevenía el delito de forzar al alcaide a dar fuga a los presos, pero no había dispuesto nada para el caso que tuviera efecto la fuga, y la Cámara de Diputados ha procedido a establecer una penalidad diferente para este delito, porque si lo hay en intentar la evasión de los presos, también la hay en haberla conseguido, o en que los presos se hayan fugado.

La única de las reformas de la Cámara de Diputados que han merecido alguna discusión en el seno de la Comisión con asistencia del señor ministro, es una de las últimas que se refiere al caso en que todos o la mayor parte de los miembros de la Corte Suprema, se hallen impedidos o recusados, para el modo de reemplazarlos. Se había adoptado el sistema de que uno que quedase no recusado, estaba habilitado para nombrar, como es de práctica, los que hayan de reemplazarlos. La Cámara de Diputados ha creído mejor el que la misma Corte nombre todos los años una lista de abogados, como se hace en el *jury* para los juicios de imprenta, y que de esta lista se insaculen los que hayan de formar el tribunal.

Sobre este punto la Comisión no había encontrado preferible este sistema, al que venía proyectado, y que el Senado sancionó. Sin embargo, por la misma razón que ha sido adoptada casi por unanimidad, y que hay muy poca esperanza que sea modificada, la Comisión ha creído que no ofrecía mayores inconvenientes, porque podía también la práctica demostrar la conveniencia de ese sistema. La Corte Suprema queda encargada, por uno de los artículos de la ley, para indicar y hacer presente al Poder Ejecutivo, para que éste lo comunique al Congreso, las deficiencias que notare en esta ley, a fin de remediarlas, y yo creo que con este arbitrio se puede remediar cualquier inconveniente, que pudiera notarse en la práctica de la ley. Estas son las razones que la Comisión ha tenido para aconsejar a la Cámara la sanción de las modificaciones introducidas por la de Diputados.

Sr. Presidente. — Propondré a la Cámara la discusión por reformas, unas después de otras.

Sr. Navarro. — En los puntos en que no haya oposición que se den por sancionados.

Sr. Alsina. — Soy de parecer que se pongan todas a la vez a discusión. Lo que debe ponerse a discusión, es el dictamen de la Comisión. Mi opinión es que aunque haya cosas que observar por tales o cuales razones, no insista el Senado, acerca de ninguna, esto dice la Comisión. Que se ponga esto a discusión, porque así puede ser que se sancione.

Sr. Presidente. — Está en discusión el dictamen de la Comisión.

Sr. Frías. — Aunque no tengo nada que proponer a la Cámara, ni me opongo a que se obre de la manera que aconseja la Comisión, me tomo la libertad de pedirle permiso para decir unas pocas palabras sobre uno de los puntos a que se refieren las enmiendas.

Yo ignoraba, señor, que en los proyectos de justicia federal hubieran disposiciones penales. Así fué que no me encontraba aquí, cuando se discutió la relativa a lo que se llama un delito cometido por el obispo o la autoridad eclesiástica, que sin obtener el pase de la autoridad civil, publicase una bula.

Sentí no encontrarme aquí porque me hubiera opuesto a que esto se llamara un delito, a que se le aplicara ninguna pena. Es muy posible que fuera de aquí yo censure alguna vez esa disposición, y como se extrañaría tal vez que lo hiciera habiendo guardado silencio en el Senado, he querido explicar la causa de mi silencio.

Ahora viene reformada la disposición por la Cámara de Diputados, y yo no quiero molestar la atención del Senado, diciéndole por qué entiendo que eso no es delito en este país, y que no puede aplicársele pena alguna. Como no es posible que la primera resolución del Senado sea alterada, haciendo esta reserva respecto de mi opinión personal, diré únicamente que eso no se considera delito en ninguna parte en que exista la libertad de conciencia, que son disposiciones de otros tiempos y para otros países, o más bien que sólo se conciben en España, que se encuentra en una situación excepcional, y donde la ley civil es intolerante.

Así, por ejemplo, vemos que el pase regio se ha suprimido en Bélgica, y que no existe en Austria, ni en Wurtemberg, a consecuencia de los últimos concordatos. En los países donde el poder civil penetra en el dominio de las cosas eclesiásticas, en virtud de concesiones de los pontífices, se comprende esa limitación de las facultades de los obispos; pero en países como el nuestro, donde existe libertad de conciencia, repito, que no se puede hacer eso. No tengo más que agregar.

Sr. Navarro. — La ley española que prohíbe la ejecución de bulas o rescriptos de la Corte Romana, sin el pase del gobierno local, se funda en un principio de eterna justicia, en el principio de la soberanía. El Papa, como lo he dicho otra vez en este lugar, reúne dos caracteres, como jefe espiritual de la Iglesia y como soberano temporal de los Estados Pontificios. En este último carácter, no puede dar disposición alguna fuera de su territorio, ni tiene valor ninguna de sus disposiciones sin el exequátur del poder civil.

Este es el principio que todas las naciones independientes tienen que observar. Si alguna por motivos particulares quiere renunciarlo, puede hacerlo; pero no por eso se ha de decir, que la que sostenga esa prerrogativa, lo hace sin razón o por capricho.

No hay nación que haya sido más fanática que España, y sin embargo, sus gobiernos han sido los más celosos en esa parte. Así es que en la legislación española, que es la nuestra también, se exceptúan sólo de la obligación aquellas bulas que se refieren a materias puramente espirituales, que son muy pocas; en lo demás tienen que someterse al exequátur, y de consiguiente comete un delito, y merece una pena, todo el que publique tales o cuales bulas sin el permiso del soberano.

Sr. Alsina. — Tengo entendido que según la Constitución, ahora no se trata de nada de eso de que se ha hablado. Creo que la discusión debe ceñirse a esto: insiste o no el Senado en la sanción que dió antes: nada más. No hay que hablar, si es delito, puesto que ya está decidido por ambas Cámaras que lo es. No hablamos de pases, ni de bulas, ni de cosa que se le parezca. En eso hay uniformidad en ambas Cámaras; no salgamos, pues, de la cuestión.

Digo, si no estoy equivocado en mis recuerdos, que lo que se establece...

Sr. Frías. — No está equivocado el señor senador. Yo mismo he empezado por reconocerlo y he pedido permiso a la Cámara para hacer presente una opinión particular.

Sr. Alsina. — Me refiero a la contestación que se ha dado al señor senador.

Sr. Frías. — Es por esa misma razón que no contesto.

Sr. Alsina. — Ahora no vamos a ver qué es lo que convenga hacer, sino a admitir una u otra cosa.

Sr. de la Vega. — Como he de votar contra una adición hecha por la Cámara de Diputados referente a la organización de un tribunal, desearía, señor, que la votación fuese por partes. No observaré nada sobre los otros ar-

tículos, porque en ellos no encuentro nada que merezca la pena de retardar la sanción de estos proyectos de ley tan importantes. Pero no puedo pasar por haberse confiado a los jueces de sección, la facultad de entender y juzgar sobre los casos de recusación.

Encuentro muy mal puesto el que sea el Poder Legislativo, tan previsor con la Suprema Corte de Justicia, que merece mucho más respeto que un juez de sección y llegue hasta ponerse en el caso que no tiene razón de ser. caso que no puede existir en el derecho constitucional. De manera que vendríamos a tener una Corte de Justicia, formada no en los términos que la Constitución establece, porque por ella los jueces de la Corte Suprema deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado. Aquí se propone una lista para insaculación y por ella no es el Poder Ejecutivo ni el Senado tampoco, sino la suerte quien va a designar ese tribunal. Creo inconveniente este proceder, lo creo desdorado porque degrada la dignidad del Poder Judicial, y lo creo inconstitucional, como ya lo he dicho. Es por esto que he de votar en contra y deseo que se haga por partes la votación, porque no quisiera que la Cámara me obligara a hacerlo en contra de todas las modificaciones.

Sr. Navarro. — Si el tribunal se hubiera de formar en todos los casos, por el sistema que ha sancionado la Cámara de Diputados, yo sería el primero que a ello me opusiera; pero es sólo para un tribunal que va a juzgar en una sola causa, en que hay la recusación de todos, o de la mayor parte de sus miembros, cosa que ha sucedido y sucede todos los días en el Tribunal de Justicia de Buenos Aires.

Esto que se ha hecho continuamente no ha ofrecido dificultad alguna, ni ha dado motivo a reclamaciones ni a quejas. Así es que el mal que afecta al señor senador sobre ese punto queda desvanecido por la consideración de que es para tal causa. Quizás sería mejor otro sistema, pero el mal viene a quedar reducido desde que es el procedimiento para una sola causa.

Sr. Presidente. — Creo que debo atender a la indicación hecha por el señor senador por La Rioja y por eso se pondrá a votación si se aprueba el dictamen de la Comisión, menos en la parte que él ha objetado.

—Puesta a votación esta proposición, fué aprobada por afirmativa general.

Sr. Alsina. — Si insiste el Senado en el artículo que sancionó antes.

Sr. de la Vega. — Es una adición.

Sr. Alsina. — El señor senador no está conforme con lo que sanciona la Cámara de Diputados, y sí con lo que sancionó la de Senadores.

Sr. Secretario. — La adición se ha introducido como artículo 23 y es el siguiente: (*Leyó*).

Sr. Presidente. — Lo que sucede es que el artículo de la Cámara de Senadores no ha sido rechazado en ninguna parte ni en una sola palabra, y dice el señor secretario que la adición es un artículo aparte.

Sr. Navarro. — Que se lea el artículo sancionado por el Senado.

Sr. Secretario. — El artículo a que se refiere es el siguiente.

—Se leyó.

Sr. Navarro. — En este artículo está previsto el caso de que habla el artículo anterior, de que esté impedido uno o dos miembros de la Corte, en que conocerán del pleito los tres que queden, pero si fuesen impedidos o recusados dos o más, entonces se manda nombrar por los que quedan hasta el número de cinco. El artículo que ha añadido la Cámara de Diputados, se pone en el caso de que la Corte Suprema quede reducida a uno o dos miembros, y entonces en lugar de establecer que se nombren por los que quedan los miembros que han de integrar el número legal, se establece que se ha de hacer por insaculación.

Sr. Presidente. — Entonces la votación será si se acepta o no el artículo introducido por la Cámara de Diputados.

—Se votó y resultó afirmativa general.

6

Sr. Madariaga. — Estando ya próximo a terminar el período ordinario de la legislatura y habiendo asuntos de mucha importancia que no podrán ser despachados en el orden de sesiones que llevamos, teniendo presente que todos los miembros del Senado, con excepción de los que residen en la Capital, se perjudican considerablemente con permanecer aquí después de terminado el término fijado por la ley, recordando que se convino en hacer diarias las últimas sesiones del año pasado y militando ahora las mismas razones, puesto que todavía falta que sancionar el presupuesto y varios otros asuntos, yo haría moción para que el señor presidente del Senado se ponga de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados a fin de poder tener sesiones diarias desde el mes de Septiembre en adelante.